ÉTICA, LEGALIDAD Y DEMOCRACIA

Gonzalo Moctezuma Barragán

*Lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo
la honestidad.*

SÉNECA

RESUMEN: Gonzalo Moctezuma Barragán asocia la transición democrática a la transición jurídica que, sostiene, también ha tenido lugar en los últimos decenios en México, procesos imbricados en compromisos éticos convertidos en principios constitucionales y legales que deben ser atendidos por instituciones públicas y actores políticos y sociales si es que hemos de concretar el Estado de derecho.

ABSTRACTS: Gonzalo Moctezuma Barragán connects the democratic transition to the judicial transition that has taken place in the last decades in Mexico. These processes have overlapped in ethical commitments that have turned into constitutional and legal principles that must be attended by public institutions and by political and social members if we want to make a true Rule of Law.

RÉSUMÉ: Gonzalo Moctezuma Barragán associe la transition démocratique à la transition juridique et affirme que dans les dernières décades au Mexique il y a eu des processus imbriqués dans des compromises éthiques qui sont devenu des principes constitutionaux et légaux qui doivent être considérés par les institutions publiques et par les acteurs politiques et sociaux si nous voulons obtenir un vrai état de droit.

En los últimos treinta años, nuestro país ha experimentado un proceso de reordenación jurídica a partir de la expedición o reforma de más del

70% de las leyes federales vigentes.¹ Esta transformación jurídica es resultado de la pluralidad política y social que se acentuó a partir de las décadas de los sesenta y setenta, y que dio lugar a la integración de órganos legislativos heterogéneos, los cuales, conjuntamente con los actores sociales, fueron los artífices de la mencionada transición jurídica. En otras palabras: el cambio jurídico es resultado de la transición a la democracia.

Este proceso, es más claro en el ámbito electoral, en donde la aprobación de leyes comiciales en forma paulatina, adoptó la generación de consensos entre las diversas fuerzas políticas como su mecanismo de mayor legitimidad. La negociación entre los partidos políticos y el Estado fue labrando un modelo cada vez mejor de ley electoral hasta llegar al nivel actual, considerándose al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, como un ordenamiento que además de representar las convicciones de los mexicanos, refleja la evolución histórica de las instituciones electorales y de los procesos políticos en México.

Así, el derecho electoral mexicano deviene de los procesos de ajuste entre las élites políticas que privilegiaron una serie de modificaciones constitucionales y legales en la época señalada, las cuales ampliaron el universo electoral y promovieron la participación política y la consolidación de órganos especializados. Al respecto, resulta destacable que la reforma de 1969 amplió el universo electoral a los jóvenes; la de 1977 a las fuerzas políticas de izquierda y estableció el sistema de representación proporcional en la Cámara de Diputados; la de 1986 construyó el primer órgano con funciones jurisdiccionales y modificó el sistema representativo de la citada Cámara; la de 1989-1990 dio origen al Instituto Federal Electoral; la de 1993 estableció los senadores de primera minoría; la de 1994 introdujo la figura de los consejeros ciudadanos en la estructura del órgano encargado de preparar las elecciones federales; en tanto que la de 1996 evolucionó la conformación política del Distrito Federal, integró al Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación, ciudadanizó al Instituto Federal Electoral, estableció los senadores de representación proporcional y construyó un sistema integral de medios de impugnación en materia electoral.

A la zaga de los derechos políticos, como diría Manuel González Oropeza, se encuentra la regulación de las precampañas, el perfeccionamiento

1 Fix Fierro, Héctor y López Ayllon, Sergio, "Tan cerca, tan lejos, cambio jurídico y Estado de derecho en México (1970-1999)", *Cuadernos de Trabajo*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1999.

to de las herramientas de fiscalización, la conformación de una cultura ecológica en la propaganda electoral, entre otros. Ello no nos impide evaluar el cambio político en México con base en los principios éticos adyacentes a todo modelo que se jacte de democrático.

Uno de los retos de nuestra joven democracia implica trascender la crisis de valores políticos, sin duda un imperativo ético primordial de nuestros tiempos. Es incuestionable que, hoy en día, se requiere de una clara traducción de los valores al lenguaje del presente para que puedan ser comprendidos y vividos por el hombre contemporáneo, es decir, se hace necesaria la actualización de estos valores. Actualización, en primer lugar, en cuanto a su realización efectiva convirtiéndolos en hechos. El verdadero cambio ha de darse, indudablemente en los sujetos políticos, es decir, en los valores hay que hacerlos propios para que éstos se conviertan y formen parte de la realidad actual. Tarea que sólo es posible como resultado de una práctica integral y constante en la cual los partidos políticos, la sociedad civil y el gobierno deben jugar un papel muy importante para constituirse en actores insustituibles en la construcción ética de la democracia.

Es necesario, además, incorporar a nuestro sistema democrático los nuevos horizontes humanísticos de este siglo, las conceptualizaciones de justicia, igualdad, tolerancia, reciprocidad y libertad, primordialmente. Estas exigencias éticas tiene que ver con los derechos que los seres humanos poseen y deben reconocerse por igual, así como estar garantizados y protegidos por el poder político y el sistema jurídico, prerrogativa basada en la propiedad común de que todos debemos ser considerados en nuestra dignidad como seres humanos, independientemente de cualquier contingencia histórica o cultural, característica física o intelectual, poder político o clase social. Tal perspectiva axiológica es propia de la filosofía política, en el sentido de que la consecución de un poder político justo se halla estrechamente relacionada con el respeto, el reconocimiento y la garantía de esos valores, los cuales pueden ser considerados como el criterio de legitimidad del poder político.

La actualización de los valores implica tomarlos como una realidad, sin pretender transformarlos de manera absoluta, ya que los valores del presente son, en gran medida, los valores del pasado, los valores de siempre, como la libertad, la equidad, la justicia, la tolerancia y la legalidad.²

2 Véase Moctezuma Barragán, Gonzalo, *Derecho y legislación electoral: treinta años después de 1968*, México, UNAM-Miguel Ángel Porrúa, 1999, pp. 24 y 25.

Como hemos señalado, ciertos valores éticos se positivizan en el ámbito del derecho, desde una perspectiva individual con la protección de los derechos fundamentales, y desde una perspectiva colectiva, con el consenso en torno a los grandes acuerdos que todos los seres humanos en uso de razón podríamos tomar; como lo son la equidad, la seguridad jurídica, y todos los principios plasmados a nivel constitucional, incluyendo la legalidad.

En el ámbito del derecho electoral, el principio de legalidad ha tenido un desarrollo propio, incluso una connotación particular derivada de la interpretación del Tribunal Electoral. En la tercera época, la Sala Superior del citado Tribunal, en la tesis relevante: PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL, derivada del juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-085/97, promovido por el PAN, con fecha de resolución 5 de septiembre de 1997 emitió al respecto el criterio siguiente:

PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL

De conformidad con las reformas a los artículos 41, fracción IV, 99, párrafo cuarto, 105, fracción II y 116, fracción IV, incisos b) y d) de la CPEUM, así como en términos de los artículos 186 y 189 de la LOPJF y 3o. de la LGS MIME se estableció un sistema integral de justicia en materia electoral cuya trascendencia radica en que por primera vez en el orden jurídico mexicano se prevén los mecanismos para que todas las leyes, actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente a lo previsto en la Constitución Federal y, en su caso, las disposiciones legales aplicables, tanto para proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos como para efectuar la revisión de la constitucionalidad o, en su caso, legalidad de los actos y resoluciones definitivos de las autoridades electorales federales y locales.

Magistrado ponente José de Jesús Orozco Henríquez.³

Adicionalmente, tenemos las referencias de la legislación positiva en conceptos jurídicos indeterminados y, consecuentemente, sujetos a interpretación. Sobre el particular, el Código Electoral es un buen ejemplo de disposiciones abstractas, referidas a valores de una sociedad en un momento determinado. Los conceptos de “modo honesto de vivir” de rai-gambre constitucional, “abstenerse de causar diatriba”, “autonomía”, entre otros, son ejemplos de cómo las normas jurídicas trascienden a ámbitos como el social o moral.

3 Véase Moctezuma Barragán, Gonzalo, *Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Comentado*, México, Instituto Federal Electoral, 2003, pp. 42 y 43.

Como es bien sabido, el artículo 41, fracción III de la Constitución general de la República, establece que en el ejercicio de la función electoral serán principios rectores la legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. La idea de establecer principios rectores en el ordenamiento jurídico tiene que ver con la preeminencia de normas en el ordenamiento.

México cuenta con dos instituciones sólidas y legitimadas en su actuación, responsables de organizar las elecciones y resolver las controversias jurídicas. El Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los cuales, en el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales deben forjar los paradigmas de ética y legalidad.

En ese sentido, es nuestra opinión que si bien la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento; en el caso de los principios éticos y los valores existe una relación directamente proporcional entre el nivel de información, educación y cultura y el grado de responsabilidad para su observancia. Por ello, son los actores directos de la democracia: gobernantes, partidos y agrupaciones políticas, quienes se encuentran más obligados a conducirse dentro de los parámetros de la ética, así como quienes representan poderes fácticos, las iglesias, los medios de comunicación, entre los más activos.

En la jornada electoral, la aplicación de las normas, queda en gran medida en manos de los ciudadanos, quienes en virtud del proceso de insaculación son escogidos para actuar como funcionarios en las casillas. Esta circunstancia le otorga a la ley electoral una naturaleza que la distingue del resto de la legislación, porque traslada a los ciudadanos la obligación de resguardar los principios democráticos.

La democracia exige el compromiso de todos sus actores con la eticidad, ya que los antivalores como la apatía, la opacidad, la corrupción, la intolerancia y la inmoralidad son incompatibles con el régimen democrático.

Conduzcámonos con sentido legal y ético, sin admitir conductas contrarias, para que nuestra democracia principiante crezca en contenidos, compromisos y por tanto en eficacia.